

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL  
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	FLOR AMPARO GARCÍA DUQUE
DEMANDADO	PORVENIR S.A.
VINCULADA	NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQUIA
PROCEDENCIA	JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-008-2020-00225-01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN
TEMAS Y SUBTEMAS	- DEVOLUCIÓN DE SALDOS – Improcedencia por afiliación irregular al RAIS
DECISIÓN	CONFIRMA

SENTENCIA No. 298

Medellín, treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N° 045 de 2023, se procede a dictar SENTENCIA en orden a resolver el RECURSO DE APELACIÓN presentado por el apoderado judicial del **DEMANDANTE** contra la *Sentencia del 2 de marzo de 2022*, proferida por el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

ANTECEDENTES

La señora **FLOR AMPARO GARCÍA DUQUE** presentó demanda ordinaria laboral en contra de **PORVENIR S.A.** con el fin de que: 1) Se condene a la AFP demandada a reconocer y pagar la devolución de saldos con los rendimientos financieros y la inclusión del tiempo laborado al servicio del **MUNICIPIO DE BETULIA** comprendido entre el 19 de octubre de 1972 y el 2 de octubre de 1994. 2) Así mismo, peticionó condenar a la AFP accionada al pago de los intereses moratorios reglados en el artículo 12 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el Decreto 1474 de 1998 y el Decreto 1513 de 1998, generados desde el 3 de marzo de 2020 hasta la fecha en que se realice el pago de la prestación en comentario. 3) Por último, reclamó la indexación de las sumas resultantes.

Fundamentó sus pedimentos en que, se encuentra afiliada al RAIS administrado por **PORVENIR S.A.**, registrando en su haber los aportes efectuados a esta entidad y el bono pensional por el servicio prestado al **MUNICIPIO DE BETULIA** entre 1982 y 1994.

Que a la fecha la entidad demandada solo le ha devuelto la suma de \$272.425 por concepto de los aportes realizados directamente, encontrándose pendiente la inclusión de lo correspondiente al bono pensional referido, respecto del cual adujo, ya cuenta con una edad superior a 60 años, momento en el que se da la redención normal de aquel.

En ese sentido, señaló que el 3 de marzo de 2020 solicitó a **PORVENIR S.A.** la devolución de saldos en los términos descritos, frente a la que no se ha pronunciado dicho fondo, incurriendo en mora en el reconocimiento de la prestación.

Que como fecha de causación debe tenerse la calenda de la última cotización, para efectos de la liquidación y capitalización del bono pensional. Más adelante, indicó que, para la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, contaba con menos de 50 años, y que en la actualidad percibe pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (f. 2 a 33 Archivo 01 ED).

### POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La demandada **PORVENIR S.A.** dio respuesta al gestor oponiéndose a las pretensiones de la demanda, como quiera que efecto, los aportes de la demandante al RAIS ascendieron a la suma de \$272.425, suma que le fue reconocida a título de devolución de saldos, sin que sea posible la emisión del bono pensional por parte de la OBP del Ministerio de Hacienda en la medida que la accionante se halla inmersa en la prohibición de exclusión presentada en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993. En consonancia con su postura, la entidad formuló las excepciones de “(...) *HECHO SUPERADO; FALTA DE CAUSA PARA PEDIR; INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS; BUENA FE; PAGO; PRESCRIPCIÓN Y COMPENSACIÓN (...)*” (f. 1 a 17 Archivo 07 ED).

A través de Auto del 12 de marzo de 2021, el Juzgado de primer grado dispuso vincular como litisconsorte necesario de la parte pasiva, a la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**. Posteriormente, en providencia del 26 de abril de 2021, se ordenó la integración del **MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA** (Archivos 08 y 17 ED).

En ese sentido, la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** dio respuesta al gestor manifestando que la demandante no tiene derecho al bono pensional tipo A, como quiera que al momento de su afiliación al RAIS, aquella tenía cumplidos los requisitos exigidos por el RPMPD para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, es decir, ya contaba con un derecho adquirido, y como consecuencia de ello, la AFP debió abstenerse de gestionar su afiliación al RAIS.

Además, expresó que la anotación en comento tiene más relevancia si se tiene en cuenta que la actora solo cotizó el equivalente a 4 semanas (1 mes) en este régimen, para reclamar posteriormente la devolución de saldos, de donde se desprende que no tuvo la más mínima intención de hacerse a una pensión en el RAIS, sino que siempre fue su interés reclamar la devolución de saldos con la inclusión del bono pensional a cargo del ente territorial, que se sabe, sería superior a la indemnización sustitutiva causada desde el año 2017.

Bajo tal entendido, formuló las excepciones de: “(...) *LA SEÑORA FLOR AMPARO GARCIA DUQUE LE DEBE SER RECONOCIDA UNA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR EL MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA DERECHO ADQUIRIDO DESDE EL AÑO 2017 FECHA ANTERIOR A LA AFILIACION AL RAIS; LA AFP PORVENIR S.A., REALIZO UNA AFILIACION IRREGULAR DE LA SEÑORA FLOR AMPARO GARCIA DUQUE; LA NACION NO ES EMISOR NI CUOTAPARTISTA DEL EVENTUAL BONO PENSIONAL DE LA SEÑORA FLOR AMPARO GARCIA DUQUE y VIOLACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (...)*” (f. 1 a 11 Archivo 10 ED).

Por último, el **MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA** alegó que no hace parte de la relación jurídica de la que surge la obligación de resolver sobre la prestación económica reclamada. En igual sentido, refirió que con su afiliación al RAIS, la demandante solo pretendió obtener el pago de una indemnización superior con cargo al sistema de seguridad social, lo que afectaría la sostenibilidad financiera de este. Propuso como excepciones las

que denominó: “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; LA NULIDAD DE LA AFILIACIÓN DE LA ACTORA POR PARTE DE LA AFP PORVENIR S.A. Y COMPENSACIÓN (...)*” (f. 1 a 7 Archivo 18 ED).

## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, mediante *Sentencia del 2 de marzo de 2022*, el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, resolvió:

*“(...) PRIMERO: Se declara que la señora **FLOR AMPARO GARCIA DUQUE**, identificada con C.C. 22.174.486 no tiene derecho a la devolución de saldos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Porvenir S.A., por tener afiliación con violación directa y en contra de la Ley por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*

*SEGUNDO: Se **ABSUELVE** a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.** y a todas la vinculadas al proceso **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL MUNICIPIO DE BETULIA**, de todas las pretensiones incoadas en su contra por la señora **FLOR AMPARO GARCIA DUQUE**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*

*TERCERO: Se **CONDENA** en costas a la parte demandante, las cuales se liquidarán por secretaria. Para que sea tenida en cuenta en la liquidación de costas se **FIJAN AGENCIAS EN DERECHO** en la suma de \$1.000.000, las cuales están a cargo de la parte demandante y en favor de las sociedades demandadas a prorrata.*

*CUARTO: Las excepciones quedaron resueltas. (...)”.*

Para arribar a esta decisión, la Juez de primer grado comenzó por estudiar la condición de afiliación de la demandante al RAIS, a fin de precisar que, si bien esta vinculación goza de presunción de legalidad y amparo a la luz del principio de la confianza legítima, es dable que la judicatura verifique si tal afiliación se materializó debidamente, para lo que se acude a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, compilado en el Decreto 1833 de 2016 en relación con la posibilidad de que servidores públicos vinculados a caja o fondo del sector público al 31 de marzo de 1994, puedan ejercer la opción del traslado de régimen, sin incurrir en la prohibición del artículo 5° del Decreto 692 de 1994, situación que debe armonizarse con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, que limita el traslado de régimen cuando al afiliado le faltaren menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, quedando entonces en cabeza de la administradora de pensiones a la que está afiliado, la responsabilidad de reconocer las prestaciones a que hubiere lugar.

En ese sentido, expuso que en el caso de la demandante, de cara a la afiliación al RAIS, aquella tiene la condición de pensionada del Magisterio, es decir, está dentro de la prohibición del Literal E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, lo que quiere decir que no se trató de una nueva afiliación, sino de un traslado con el objetivo de obtener el pago de bono pensional tipo A, capitalizado, precisamente a través de la devolución de saldos, como quiera que para las prestaciones a cargo del RAIS, dichos periodos deberían ser contabilizados; no obstante, al advertir que la afiliación de aquella se dio con violación a la normativa en comento, representa que esta no pueda causar efectos frente a la AFP, quedando sin piso la posibilidad de que sea el régimen privado el encargado de resolver sobre la entrega de los recursos del citado bono, ya que el fondo ni siquiera podía afiliar a la accionante. En consecuencia, coligió que no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

## RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte **DEMANDANTE** interpuso apelación argumentando que la Juez hizo uso de lo estipulado en los Literales D y E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 33 del mismo compendio; no obstante, explicó que la dimensión de lo discutido tiene que ver con que su defendida es

pensionada por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, situación por la cual está exceptuada por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, aspecto analizado por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral – CSJ, así como del Tribunal Superior de Medellín, escenarios en los que se ha concluido la compatibilidad entre la pensión recibida por la actora y el bono pensional o prestaciones del sistema general de pensiones, aludiendo que la Juzgadora echó mano de las mismas normas que se han utilizado para conceder esta clase de prestaciones (SL451-2013, SL2641-2020, SL3291-2020, SL3359-2020 y SL1366-2021), pues pensar lo contrario, sería aceptar el enriquecimiento sin causa de las entidades pensionales, al no dispensarle las prebendas a que tiene derecho en cualquiera de los regímenes pensionales.

Bajo esa idea, insistió en que pese a su condición, podía la demandante afiliarse al RPMPD o al RAIS, independiente de su edad, ya que un planteamiento distinto sería desconocer el derecho al trabajo, teniendo la posibilidad de afiliarse al sistema de pensiones, vinculación incluso aceptada por la Jurisprudencia para personas que superan la edad mínima de pensión (SL4698-2020, SL3339-2021 y SL4405-2021), añadiendo que la única limitación que existe sería la contemplada en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, precepto que no tiene cabida en el asunto analizado, en la medida que su prohijada tenía menos de 50 años a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

Continuó manifestando, que aun de considerarse el cambio de la indemnización sustitutiva por la devolución de saldos, esa facultad la concede el sistema como tal con la libertad de acceso al régimen, lo que se desprende de la normativa aplicada por la Juez de instancia, ya que lo sucedido con la demandante fue una selección inicial de régimen, no reglamentada por el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su literal E, interpretado erróneamente en la sentencia, en tanto sostener lo decidido en primera instancia, sería tanto como concluir la incompatibilidad entre el régimen del magisterio y las prestaciones del sistema de pensiones, más cuando el tiempo solicitado no fue tenido en consideración para el reconocimiento de la pensión que hoy goza.

### ALEGATOS DE CONCLUSION

Dentro del término otorgado, la mandataria de **PORVENIR S.A.** reiteró la improcedencia de lo solicitado por la demandante, por lo que solicitó mantener la absolución dispuesta en primera instancia (Archivo 03 ED Tribunal).

### PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto se circunscribe a establecer si la señora **FLOR AMPARO GARCÍA DUQUE** tiene derecho la devolución de saldos que reclama con la inclusión del tiempo laborado por esta al servicio del **MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA**, para lo cual se estudiará la validez de la afiliación de aquella a **PORVENIR S.A.** En caso positivo, se verificará la procedencia de los intereses moratorios solicitados en la demanda.

Se procede entonces a resolver los planteamientos, previas las siguientes,

### CONSIDERACIONES

Para comenzar, se precisa que no son objeto de debate los siguientes supuestos fácticos:

- (i) Que la señora **FLOR AMPARO GARCÍA DUQUE** nació el 21 de enero de 1960, conforme lo muestra el Certificado de Tiempos Laborados visible en el Archivo 14 ED.

- (ii) Que la demandante laboró al servicio del **MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA** desde el 19 de octubre de 1982 hasta el 2 de octubre de 1994 (Archivo 14 ED).
- (iii) Que a través de *Resolución No. 2015000357401 del 28 de junio de 2017*, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció a la señora **GARCÍA DUQUE** la pensión de jubilación desde el 1 de julio de 2017 en razón de su labor como docente (f. 37 a 40 Archivo 01 ED)
- (iv) Posteriormente, el 24 de octubre de 2019 la actora se afilió al RAIS administrado por **PORVENIR S.A.**, entidad a la que aportó un total de 12,8 semanas de cotización a través de empleador El Portal del Servicio S.A.S. (f. 62 a 64 Archivo 07 ED).
- (v) Que previa solicitud elevada por la demandante, mediante oficio del 8 de abril de 2020, **PORVENIR S.A.** le comunicó el reconocimiento de la devolución de saldos por valor de \$272.425, correspondiente a las semanas cotizadas directamente por aquella, y los rendimientos generados. Posteriormente, en misiva del 29 de septiembre de 2020 puso en conocimiento el rechazo emanado de la OBP del **MINISTERIO DE HACIENDA** en lo relacionado con el bono pensional (f. 59 a 61 Archivo 01 ED).

## DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS

La Juez de primer grado concluyó en la absolución de la AFP demandada, tras considerar que la afiliación de la demandante al RAIS fue inválida, como quiera que, para el momento de su vinculación a dicho régimen no se dio en los términos de una afiliación nueva, sino de un traslado de régimen, encontrándose así inmersa en la prohibición del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, más si se tiene en cuenta, dijo la falladora, que la única intención de la actora al afiliarse al régimen privado de pensiones, lo era la obtención del bono pensional completamente capitalizado, a través de la devolución de saldos.

A esa conclusión se opuso la PARTE DEMANDANTE, argumentando, en síntesis, que además de tener la posibilidad de afiliarse al Sistema General de Pensiones, sin importar su edad o la condición de pensionada por su servicio al Magisterio, tenía la posibilidad de acceder a las prestaciones ofertadas por el sistema pensional, las cuales no eran incompatibles con la pensión de jubilación percibida.

Bajo el anterior panorama, nótese que al detenerse la Sala en los argumentos que edifican la alzada, se encuentra que la parte accionante en realidad no atacó el fundamento que condujo a la decisión absolutoria, en la medida que sus argumentos van encaminados a hacer ver la devolución de saldos peticionada como compatible con la pensión de jubilación que recibe por cuenta de su servicio en el sector oficial de la docencia, mientras que el sustento de la sentencia estuvo cernido a que la vinculación de la demandante al RAIS no surtió efectos por haberse desconocido el ordenamiento legal, conclusión frente a la cual no tiene reparo esta Corporación por las razones que pasan a explicarse.

Sea del caso comenzar reseñando que la Ley 100 de 1993 dio un giro total al sistema tradicional que regía en el país en materia pensional, creando el denominado Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, constituido por dos regímenes coexistentes pero excluyentes entre sí (Art. 12). Por un lado, el *Régimen de Prima Media con Prestación Definida* administrado hasta ese momento por el ISS hoy COLPENSIONES, y las demás Cajas o Fondos de Previsión existentes para la época, (Art. 31); y de otro lado, el *Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad*, gestionado por Administradoras de Fondos de Pensiones de origen privado, creados a partir de la citada ley.

En contraste con lo anterior, debe anotarse que en el régimen de prima media el otorgamiento de la pensión de vejez depende del cumplimiento de las condiciones de edad y cotizaciones (Art. 33 Ley 100 de 1993). en tanto que, en el RAIS, según lo que interesa al caso objeto de estudio, el reconocimiento de esta prestación atiende al capital acumulado por el afiliado en su cuenta de ahorro individual, conforme lo señalado en el artículo 64 *ibídem*.

Ahora, en cuanto a la administración del primero, el compendio legal referido contempla que su gestión está a cargo del Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado existentes al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 mientras subsistan.

Al respecto, señaló en su artículo 52 *ejusdem*:

*“(…) Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.*

**Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquéllos se acojan a cualquiera de los regímenes pensionales previstos en esta Ley.**

*Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, estarán sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria (...).”*

A partir del contenido de la disposición en cita, lo primero que se extracta es que los empleadores públicos que reconocían prestaciones con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tenían como administradores del régimen de prima media, circunstancia que implicaba para las personas que prestaban o prestaron sus servicios a estas entidades, para efectos prestacionales, que se entiendan como afiliadas al RPMPD.

De otro lado, es claro que, en materia de afiliación a cada uno de los regímenes, una vez se opta o selecciona alguno de ellos, comporta una facultad de los afiliados la posibilidad de trasladarse entre uno y otro, eso sí, siempre que se satisfaga la condición establecida en **los términos del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003.**

No obstante, vale aclarar que el derecho a la libre selección de régimen, si bien es una prerrogativa fundamental del derecho a la seguridad social, el mismo no es absoluto y aparece limitado por razones de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, **introduciendo el legislador una restricción consistente en que a las personas a las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad pensional no pueden ejercer su movilidad entre regímenes pensionales.** Justo en esos términos lo consagró el precepto descrito, a saber:

*“(…) e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. **Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez (...)**” (Subraya y Negrilla de la Sala).*

Conviene precisar que esta limitación legislativa fue objeto de control constitucional por los cargos de violación del derecho de igualdad y por menoscabar las libertades de los trabajadores, demanda que fue resuelta en la sentencia C-1024 de 2002, en la cual se expuso:

*“(…) el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del*

*Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. art. 48). Así mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, **pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional.** (...)”.* (Negrilla de la Sala).

Puestas de ese modo las cosas, en el particular se tiene que la señora **FLOR AMPARO GARCÍA DUQUE** trabajó al servicio del **MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA** entre 1982 y 1994 (Archivo 14 ED), entidad que conforme se desprende del mismo certificado de tiempos laborados, asumía directamente el pago de las prestaciones de sus empleados, teniéndose así que durante el lapso correspondiente asumió la condición de administradora del RPMPD, lo que deja entrever entonces, que al no haber seleccionado alguno de los regímenes pensionales creados a partir de la Ley 100 de 1993, para el 24 de octubre de 2019, cuando suscribió el formulario de vinculación a **PORVENIR S.A.** (f. 62 a 64 Archivo 07 ED), esta acción se trató verdaderamente de un traslado de régimen, como lo indicó el *A quo*, dado que anteriormente el ente territorial fungió como su administradora del RPMPD.

Siendo así las cosas, de acuerdo con lo reglado en el ordenamiento sobre la selección inicial y los traslados de régimen, y atendiendo a que la demandante nació el 21 de enero de 1960 (Archivo 14 ED), es claro que, para cuando decidió afiliarse al RAIS contaba más de 57 años (los cumplió el 21 de enero de 2017), quedando así incurso en la prohibición de traslado descrita en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, en la medida que para esa data ya había alcanzado la edad mínima exigida para la gracia pensional, no siendo posible realizar la movilidad entre regímenes.

Y es que, en refuerzo de lo anterior, surge que, desde el interrogatorio de parte (Min. 08:57 a 25:26 Archivo 21 ED), la propia demandante aseguró que su afiliación al RAIS se dio por sugerencia de su apoderado, con el objetivo de acceder al tiempo correspondiente a los años que laboró en el municipio, manifestaciones que permiten colegir que su vinculación al régimen privado no se produjo en el marco de una relación laboral efectiva, como lo pretende hacer ver el accionante, sino con el único interés de capitalizar una devolución de saldos con el tiempo laborado por la accionante en el sector público, representado en el bono pensional respectivo, situación que por demás se ha visto evidenciada como una práctica recurrente en cierto grupo de personas que se advierten representadas por el mismo mandatario principal de la aquí demandante, efectuando vinculaciones con un mínimo de cotizaciones a través del empleador “El Portal del Servicio S.A.S.” (f. 62 a 64 Archivo 07 ED).

Así entonces, al concluirse que la afiliación de la demandante a **PORVENIR S.A.** se dio en condiciones irregulares, se impone la confirmación de la sentencia de primer grado. Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo del demandante, incluyendo como agencias en derecho de esta sede la suma de \$500.000.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia resuelve en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,


## RESUELVE


**PRIMERO: CONFIRMAR** la Sentencia del 2 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

**SEGUNDO:** Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo del demandante, incluyendo como agencias en derecho de esta sede la de \$500.000.

## NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA